

Santiago, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés.

Vistos:

En estos antecedentes Rol N° 122175-2020 de esta Corte Suprema, por sentencia de primera instancia de tres de noviembre de dos mil dieciocho, escrita a fs. 2398 y siguientes de estos antecedentes, en lo que interesa a los recursos se condenó a Patricio Orlando Maraboli Orellana a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo como autor del delito de secuestro calificado en la persona de Francisco Sánchez Argüen, previsto y sancionado en el artículo 141 inciso tercero del Código Penal, hecho cometido a partir del 1 de octubre de 1973, en la comuna de Chillán. En la parte civil se condena al Fisco de Chile a pagar \$ 80.000.000 a la cónyuge de la víctima y \$ 60.000.000 a cada uno de sus siete hijos.

Apelada dicha resolución, la Corte de Apelaciones de Concepción, por sentencia de tres de julio de dos mil veinte, que se lee a fs. 2525, confirmó la de primer grado.

Contra ese último pronunciamiento, la parte querellante representada por la abogada señora Patricia Parra Poblete y la Unidad del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría del ramo interpusieron recursos de casación en el fondo, que se ordenaron traer en relación por decreto de fojas 2560.

Considerando:

Primero: Que la parte querellante representada por la abogada señora Patricia Parra Poblete invoca la hipótesis de invalidación contemplada en el artículo 546 N° 1 del Código de Procedimiento Penal, en relación a los artículos 11 N° 6; 68 inciso primero, 69 y 141 inciso primero del Código Penal.



Explica que el tribunal ad quem, al igual que el ministro instructor en el veredicto de primera instancia, reconoce la atenuante del artículo 11 N° 6 del Código Penal, argumentando que esa minorante tiene un carácter objetivo, lo que obliga a su consideración ante la ausencia de anotaciones prontuariales pretéritas en el extracto de filiación y antecedentes.

Arguye que en este caso, tal circunstancia no acontece, pues en el extracto de filiación y antecedentes del condenado contiene una anotación por una sentencia condenatoria, en la que se le impuso la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo como autor del delito del secuestro calificado, cometido en las personas de Óscar Enrique Fetis Sabelle, Sergio Iván Fetis Valenzuela, Luis Guillermo Wall Cartes y Tomás Enrique Ramírez Orellana, perpetrados cerca de la medianoche del día 5 de noviembre de 1973, en la ciudad de Chillán, la que se encuentra cumpliendo en la actualidad.

Agrega que no existen antecedentes en el expediente criminal que justifique o fundamente una menor pena, más considerando que la calidad de rematado, la tiene por una sentencia que estableció que los ilícitos atribuidos al accionar punible de Maraboli Orellana lo fueron en un contexto de graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidos en el país durante la dictadura militar y que, no obstante, calificarse el injusto cometido en la persona de la víctima de autos de secuestro calificado, participa de las características de un delito de lesa humanidad, por ende, imprescriptible e inadmisiable desde el punto de vista de la persecución penal y prohibición de aplicar disposiciones internas que importen auto exoneración.

Concluye solicitando se anule y se deje sin efecto la sentencia recurrida, y se dicte, sin nuevo juicio, una de reemplazo que condene al acusado a la pena de quince años de presidio mayor en su grado medio como autor del delito indicado,



conforme lo dispuesto en el artículo 68 inciso primero, artículo 69 en relación con el artículo 141 inciso 3, todos del Código Penal.

Segundo: Que el arbitrio de nulidad impetrado por la Unidad del Programa de Derechos Humanos se funda en la causal establecida en el artículo 546 N° 1 del Código de Procedimiento Penal, en relación a los artículos 68 inciso segundo y 69 del Código Penal, atendido que la sentencia impugnada no desarrolla las razones por las cuales desconoce que la gravedad del daño producido y el delito del cual se trata, justificaban aplicar el grado medio de la pena, conforme una correcta aplicación del derecho. Además, que, el reconocimiento de una atenuante, según dispone el artículo 68 inciso 2° del Código Penal, sólo implica que no podría aplicarse el grado máximo, pudiendo, en tal caso, imponerse los grados medio o mínimo de la sanción, por lo que tratándose de un caso de lesa humanidad, en que la víctima de autos hasta la fecha no es habida, lo que importa un desgaste emocional constante para sus familiares, y además, el hecho de que estos casos por su gravedad y consecuencias son importantes para la sociedad en su conjunto, pues inciden directamente en nuestra democracia y el respeto por la justicia; en una correcta ponderación de las normas aplicables, era necesario pronunciarse claramente sobre las razones que llevan a otorgar una pena tan nimia, teniendo un margen tan amplio de actuación y pudiendo, por tanto, aplicar una pena que se ajustara de mejor manera a derecho.

Finaliza pidiendo se acoja, anule y deje sin efecto la sentencia recurrida, acto seguido, dicte sentencia de reemplazo conforme a la ley y al mérito del proceso, condenando al acusado a la pena de quince años de presidio mayor en su grado medio.



Tercero: Que la sentencia de primer grado, confirmada por el tribunal de alzada, en su motivo segundo establece que son hechos de la causa los siguientes:

“Que alrededor de las 20:40 horas del 1 de octubre de 1973, en circunstancias que Francisco Sánchez Arguen se encontraba en su domicilio ubicado en calle Libertad N° 715, en compañía de su mujer y 6 de sus 7 hijos, fue detenido, sin orden judicial o administrativa competente, por una patrulla de Carabineros al mando de un Teniente, los que vestidos con tenida de combate y portando armas largas, lo introducen a uno de los vehículos en que se movilizaban, trasladándose –con el detenido-, a un departamento de su propiedad, ubicado en calle Libertad N° 39, departamento 22, el que fue allanado, mientras Sánchez Arguen permanecía sentado en el móvil policial y custodiado por Carabineros. Una vez concluido el registro, fue traslado a la Segunda Comisaría, en cuyo trayecto fue también detenido Mario Garrido Carrasco, quien fue introducido al mismo jeep en que iba Sánchez Arguen, ambos conocidos de antes, por haber trabajado juntos, siendo ingresados a la indicada Unidad Policial, donde quedaron en celdas separadas y, después de ser sometido a interrogatorios en ese lugar y fecha, no se tiene noticias del paradero o destino del señor Sánchez Arguen.”

Cuarto: Que tales hechos fueron estimados por los jueces de segunda instancia como constitutivos de un delito de secuestro calificado, previsto y sancionado en el artículo 141 inciso 3 del Código Penal, en grado de consumado, compartiendo lo decidido por el tribunal de primer grado, debiendo Marabolí Orellana responder a título de autor.

Asimismo, la sentencia recurrida coincide con lo concluido por el juez de primer grado en relación a la concurrencia de la minorante de irreprochable



conducta anterior que se reconoció al sentenciado. Señalan al efecto, que el extracto de filiación y antecedentes del acusado no registra anotaciones prontuariales pretéritas.

Quinto: Que, como cuestión previa es útil recordar que el recurso de casación en el fondo tiene por objeto velar por la correcta interpretación y aplicación de las normas llamadas a dirimir la controversia, con el objeto de que este tribunal pueda cumplir con la función uniformadora del derecho asignada por la ley. Para el desarrollo de tal propósito, la ley ha señalado que deben explicitarse los yerros jurídicos que se han cometido en la decisión de lo resuelto, los que deben tener influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, exigencia que se traduce en la necesidad de demostrar la concurrencia de las hipótesis invocadas, con un efecto trascendente, concreto y vinculado con el yerro que se acusa, de suerte que su verificación otorgue competencia a este tribunal para determinar lo correspondiente, en el ámbito privativo de este recurso de carácter sustantivo.

Sexto: Que cabe analizar si las vulneraciones legales que los agraviados denuncian, para el evento de haberse éstas acreditado, habrían gravitado en forma sustancial en la determinación del quantum de la sanción que debió ser aplicada al sentenciado. Al efecto ha de consignarse que la pena asignada por la ley al delito, descrita en el inciso tercero del artículo 141 del Código Penal, es la de presidio mayor en cualquiera de sus grados, esto es, de cinco años y un día a veinte años de presidio mayor. Pues bien, para el caso de autos, concurriendo una circunstancia atenuante, como lo estiman los jueces, bien pudieron aplicar la pena de la forma que lo hicieron; mientras que por el contrario, si no existieran circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal que considerar, como lo pretende el recurso, conforme



lo dispone el artículo 68 inciso primero del Código Penal, los sentenciadores están facultados para recorrer la pena asignada al ilícito en toda su extensión, vale decir, igualmente estarían en aptitud de sancionar de la manera como lo hicieron, de suerte que aún si se estimara procedente acoger el recurso, y considerar que no concurre la atenuante, ello no influiría en lo dispositivo de la sentencia, debiendo por tanto ser éste rechazado.

Séptimo: Que, respecto al quebrantamiento del artículo 69 del Código del Ramo, cuya inobservancia reclama la Unidad del Programa de Derechos Humanos, es norma imperativa sólo en cuanto a que los jueces, al decidir la cuantía de la pena, deben atender al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes que concurren en el caso, como asimismo a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito, siempre que con ello no excedan los límites que la ley asigna al delito, considerando, obviamente, las facultades que les otorgan los artículos 68, 68 bis y demás pertinentes contemplados en el párrafo cuarto del Título III del Libro I del Código Penal. Consiguientemente esas ponderaciones son privativas y facultativas para los sentenciadores, de suerte que respecto a ello no es procedente impetrar infracción de derecho, a menos que en definitiva excedan los márgenes superiores o inferiores de las penas, lo que no es el caso de autos, por lo que no concurre la infracción denunciada, debiendo desestimarse el arbitrio impetrado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 535, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal; y 767 y siguientes del de Procedimiento Civil, **se rechazan** los recursos de casación en el fondo planteados por la parte querellante representada por la abogada señora Patricia Parra Poblete y por la Unidad del Programa de Derechos Humanos,



contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción el tres de julio de dos mil veinte, escrita a fs. 2525 a 2531, la que no es nula.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Munita.

Rol N° 122.175-2020.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., la Ministra Sra. María Teresa Letelier R., y los Abogados Integrantes Sr. Diego Munita L., y Sra. Leonor Etcheberry C. No firma la Abogada Integrante Sra. Etcheberry, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente.



Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

